



INFORME COMUNICACIONES DICIEMBRE 2021



La elección presidencial del 21 de diciembre fue la culminación de un largo proceso electoral en Chile, que configuró un cambio en el escenario político, económico, institucional y generacional, calificado como “coperniano”, con la elección del presidente más joven de la historia de Chile, con un Congreso dividido en mitades, una Convención Constitucional que debe presentar al país una nueva Carta Magna que delineará las bases normativas de una sociedad que intenta superar la polarización emanada del estallido social de 2019, y con un país que enfrenta las consecuencias económicas que dejó la pandemia (déficit estructural cercano al 4%, alta inflación, salida de capitales, desempleo).

Gabriel Boric se transformó en el Presidente de Chile con la más alta votación de la historia electoral, en un balotaje donde- pese a la ventaja que obtuvo su contendor José Antonio Kast en la primera vuelta- logró movilizar a un contingente de nuevos votantes (mayoritariamente mujeres y jóvenes), que rompieron la tendencia de las últimas décadas de alta abstención y llevaron a una fuerza política nueva, Apruebo Dignidad (constituida por el Frente Amplio, los movimientos formados en las marchas estudiantiles de la década pasada y el Partido Comunista), que levantó las banderas del cambio al modelo neoliberal y al sistema de bloques tradicionales de la política chilena, que durante tres décadas se alternó en el poder, y al sistema institucional heredado del gobierno militar y plasmado en la Constitución de 1980.

La campaña del abanderado del Partido Republicano y Chile Vamos Más, José Antonio Kast mantuvo el eje de su campaña en el tema de la ingobernabilidad que representaba una fuerza que incluye al PC y la radicalidad del programa del candidato Boric, especialmente en materia económica (fin de las AFP, término de las isapres, reestructuración de carabineros, entre otras), mientras que este último, en un giro estratégico sorpresivo, moderó sus propuestas y discurso consiguiendo el apoyo de figuras emblemáticas de la ex Concertación, que se plegaron sin condiciones con sus votos, y de las mujeres y jóvenes.

Aunque el mercado acusó en los primeros días el efecto de la elección con una baja fuerte en los activos accionarios y un alza del dólar, los analistas económicos y el sector empresarial han señalado que la designación de los equipos que acompañarán al presidente Boric- en especial quiénes serán los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo- serán los factores que incidirán en la confianza de los inversionistas, ya que será una señal respecto a si el nuevo gobierno optará por seguir con reformas graduales o si optará por cambios estructurales en materia tributaria, laboral, pensiones y otras, incluidas en el programa. Las declaraciones de personeros del Frente Amplio, señalando que la nueva administración necesita abrir su pacto para poder llevar adelante sus reformas al no tener mayoría en el Congreso, y la decisión de algunos partidos de la ex Concertación de apoyar sin compromisos al nuevo gobierno se han visto reflejados en la encuesta CADEM de fines de año, donde el presidente electo aparece con una alta aprobación, y donde los chilenos afirman tener una mirada positiva sobre el nuevo gobierno, lo que para los analistas pone mayor presión a la futura administración por las altas expectativas generadas. A fines de enero- fecha que se ha autoimpuesto Boric para anunciar su gabinete se verá si la fórmula de la segunda vuelta triunfa o si se impone la voluntad de los sectores más radicales (Jadue, Tellier del PC) de no desviarse del programa inicial.

En la oposición, en tanto, la lucha por el liderazgo se ve complejo por cuanto las dos almas de la derecha (la liberal y la conservadora) han entrado en pugna para definir cuál será la estrategia y el tipo de oposición que harán al nuevo gobierno y su rol en el Congreso, donde tienen un 50% del Senado y el 44% de la Cámara de Diputados. En tanto, el gobierno saliente trabaja para marcar su legado futuro, donde el manejo de la pandemia aparece como uno de los hitos más relevantes, al terminar Chile como el cuarto país en el mundo en tener su vacunación completa. El envío al Congreso del proyecto que establece la Pensión Garantizada Universal (PGU) ha enfrentado a los equipos económicos de la administración Piñera y del presidente electo, por el financiamiento del mismo y por el momento en que se propone, aunque todos los sectores políticos coinciden en que resultará difícil restarse a un tema que es prioritario para los chilenos hoy.

La Convención Constituyente, por su parte, deberá elegir la primera semana de enero a la mesa directiva, que reemplazará a Elisa Loncón y Jaime Bassa, como presidenta y vicepresidente, y que tendrá la responsabilidad de dirigir la etapa de redacción de la nueva Constitución, la que deberá ser presentada a la ciudadanía el próximo 4 de julio, la que decidirá si la aprueba o rechaza en el plebiscito de salida. Los constituyentes terminaron su trabajo de comisiones y recibieron las iniciativas ciudadanas planteadas en consulta, la que podrán ser tomadas en cuenta o no en las propuestas finales.

En materia agrícola, los incendios producidos a lo largo del territorio, especialmente en la V, VI, VII, VIII, IX y X región, afectaron durante diciembre a más de 30.000 hectáreas. En Quillón, donde se quemaron más de 3000 hectáreas, la ministra María Emilia Undurraga prometió ayuda a los agricultores, especialmente alimento para los animales, y señaló que la sequía que afecta desde hace 13 años al país ha permitido una rápida propagación del fuego en muchos lugares.

El mundo agrícola planteó, a través de la Revista del Campo, sus peticiones al presidente electo. Algunas de las más importantes: mejorar la calidad de vida en las zonas rurales, a través de la conexión a internet y el acceso a la salud; fin a la violencia en la Araucanía, que ha significado toma de campos, quemas de galpones y maquinaria, muertes; despejar la incertidumbre sobre la posible revisión de tratados internacionales para mantener el ritmo exportador de Chile en materia agrícola; mayor capacitación y acceso simplificado a los fondos estatales para riego tecnificado que permita el aumento de la horticultura; enfrentar el problema histórico de escasez de agua, que podría significar un cambio en la estructura productiva agrícola del país.